

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Jacobo Anaya, Lázaro Rodríguez y Manuel Campos, contra la sentencia del C. Gefe político de Allende, que los condenó á la última pena.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: los reos Jacobo Anaya, Lázaro Rodríguez y Manuel Campos, sentenciados á la pena de muerte por la Gefatura política de Allende, por el delito de asalto, presentaron un ocurso al Juez de letras del mismo partido, interponiendo el recurso de amparo, fundados en que en sus personas se habia violado la garantía individual consignada en el artículo 23 de la Constitución federal, y pidiendo se ordenara la suspensión de dicha pena por ser de urgencia notoria, habiéndoles negado la H. Legislatura la gracia de indulto que solicitaron.

El C. Juez de Allende no decretó la suspensión, y los defensores de los quejosos ocurrieron por telégrafo al Juzgado de Distrito, que no tenía conocimiento de las diligencias practicadas ante el Juez de Allende, pidiendo la orden de suspensión que fué decretada después de hacer que se designaran las garantías individuales que reputaban violadas, y previniéndoles que presentaran el escrito de queja en forma.

Las garantías individuales que se designaron, fueron las consignadas en los artículos 20 fracciones 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, 21, 23, 24 de la Constitución federal, y además se dice que la ley que suspendió algunas de dichas garantías á los salteadores y plagiarios, se opone al artículo 127 de la misma Constitución. El C. Gefe político de Allende informó, que los quejosos habian sido juzgados con arreglo á la 1ª parte del artículo 3º de la ley de 23 de Mayo de 1872,

por haber sido aprehendidos infraganti delito de asalto, levantándose el acta respectiva en que se hizo constar el hecho de la aprehension, la identificación de sus personas y se pronunció sentencia de muerte que se notificó á los acusados. A este informe no se acompañó justificante alguno, porque el acta que se levantó fué remitida por conducto del Supremo Tribunal de Justicia á la H. Legislatura del Estado.

Durante el término probatorio se recabó dicha acta y se recibió en el Juzgado de Allende una informacion de testigos, constando en la primera, que los quejosos fueron aprehendidos infraganti delito de asalto, supuesto que los aprehendieron en los momentos en que el C. Vicente Hernández logró separarse de ellos, y aun opusieron resistencia, haciendo uso de sus armas. La informacion de testigos de que se ha hablado, no es bastante para destruir las constancias de dicha acta, debiendo concluirse, que los quejosos están comprendidos en la ley con arreglo á la cual fueron juzgados y sentenciados.

Esta ley en su artículo 1º suspende para los salteadores y plagiarios las garantías individuales que otorga la Constitución en sus artículos 20 y 21, de manera, que no pueden fundar en el presente caso el amparo que se solicita. La infracción del artículo 23 se hace consistir, en que en el Estado existe una prision que se llama Penitenciaría de Salamanca, infringiendo de este hecho, que desde la creación de esta prision, según el artículo citado, debió quedar abolida la pena de muerte, cuando el artículo constitucional habla del régimen penitenciario para prisiones, el cual no está establecido en la República ni en el Estado, ni lo constituye una prision como la que existe en Salamanca.

El artículo 24 que tambien se ha invocado, prohíbe que alguno sea juzgado dos veces por el mismo delito; y no consta que los quejosos hayan sido juzgados mas que una vez, y tampoco han sufrido ya la pena á que fueron sentenciados, puesto que siendo

la de muerte, no se ejecuta con el hecho de ser puesto en capilla el sentenciado, y aun su misma naturaleza hace imposible que se ejecute dos veces.

La ley según la cual fueron juzgados y sentenciados los quejosos, no se opone al artículo 127 de la Constitución, porque no viene á ser una adición ó reforma de ella, sino una suspensión de garantías individuales, decretada por la autoridad competente y en uno de los casos previstos en el artículo 19 de nuestra Carta fundamental.

Reasumiendo las consideraciones que antes se han hecho, el Promotor fiscal no encuentra que se haya violado ninguna garantía individual en la persona de los quejosos, y en consecuencia, pide al Juzgado se sirva denegarles el amparo de la Justicia federal que solicitan.

Guanajuato, Enero 19 de 1874.—*José Aguilar y Córdoba*.—Una rúbrica.

Otrosí dice: que por mis enfermedades no le fué posible presentar este escrito dentro del primer término que se señaló.—Una rúbrica.

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Guanajuato, 2 de Febrero de 1874.—Visto el presente juicio de amparo promovido por Jacobo Anaya, Lázaro Rodríguez y Manuel Campos, contra la pena de muerte que por el delito de asalto les impuso el Gefe político del departamento de Allende, con arreglo á la ley de 28 de Mayo de 1872, y violando en concepto de los quejosos, los artículos 20, 21, 23, 24 y 127 de la Carta fundamental de la República; resultando que el día 20 de Octubre del año citado fueron aprehendidos los peticionarios en el acto de asaltar á mano armada al C. Vicente Hernández en un punto llamado Puerto de Abrego, sito en el camino que une á Querétaro con Allende, y puestos á disposición de la autoridad política respectiva, fueron juzgados conforme á la primera parte del artículo 3º de la ley de 28 de Mayo

de 1871, sin mas requisito que el levantamiento de una acta en la cual se hizo constar el hecho de haber sido capturados infraganti y la identificación de las personas de los reos. Considerando que por virtud de las enunciadas leyes, no disfrutaban los promoventes de las garantías que proclaman los artículos 20 y 21 de la Constitución, y que están expresamente suspensas para los salteadores y plagiarios. Considerando que la pena de muerte está admitida para los delitos que menciona el artículo 28 del mismo Código, que forma parte integrante de nuestro sistema penal, que no puede suprimirse mientras éste sistema no sea reformado; y que su abolición no depende del establecimiento de una ó mas penitenciarias en la República, sino de una ley dada por autoridad competente, que sustituya la referida pena con el régimen penitenciario, mandado adoptar por el artículo constitucional citado; por cuyas razones y no obstante existir en el Estado la Penitenciaría de Salamanca, no aparece que se haya violado en las personas de los quejosos la garantía del artículo 23 que ellos invocan. Considerando que no han sido juzgados dos veces por un mismo delito y por esto no se ha conculcado en su perjuicio el artículo 24 del pacto federal. Considerando que la suspensión de garantías autorizada por las leyes que han servido de norma en el proceso ó acta de que los promoventes se quejan, no constituye una adición ó reforma constitucional, supuesto que no tiene por objeto llenar los vacíos ni corregir los defectos de aquel pacto; y que por el contrario, la suspensión de que se trata está fundada en el tenor del artículo 29 de la Constitución, que prescribe los casos en que pueden suspenderse las garantías individuales; por las indicadas consideraciones, de conformidad con el pedido fiscal y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, el C. Juez de Distrito declara que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á los reos de asalto Lázaro Rodríguez, Jacobo Anaya y Manuel Cam-

pos; contra la pena de muerte que les impuso el Cefe político del departamento de Allende. Notifíquese este fallo á las partes, publíquese en el periódico oficial, y remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos legales de ley. Así lo C. Juez de Distrito lo decretó y firmó. Doy fé. Albino Torres. Luis G. Medinilla. Es copia que certifico. Guanajuato 12 de Febrero de 1874. *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.* México, 12 de Febrero de 1874. Visto el juicio de amparo promovido por Jacobo Anaya, Lázaro Rodríguez y Manuel Campos, ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato, contra la sentencia del C. Cefe político de Allende, que los condenó á la última pena; visto el informe de la autoridad responsable; la prueba recibida; el pedimento fiscal; la sentencia del inferior; y considerando que el hecho del asalto está plenamente probado en la sumaria que obra en autos; que el sistema penitenciario aun no está establecido por quien corresponde en toda la República, y por consiguiente subsiste en todo su vigor legal el artículo de la Constitución que mantiene temporalmente la pena de muerte, no en virtud de los artículos 101 y 102 de la Constitución, se decreta: que es del confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito de Guanajuato que declara que la Justicia de la Unión no ampara á prótege á Lázaro Rodríguez, Jacobo Anaya y Manuel Campos, contra el Cefe político de Allende, que los impuso la pena capital; y en consecuencia los autos del Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese

se por los periódicos y archívese á su vez al Hoga. Así, por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron: Pedro Ordaz. Juan M. de la Garza. José María Lozano. José Arteaga. Pedro Ordaz. Ignacio Ramírez. Manuel de Castañeda y Nájera. Simon Guzman. Luis Velasquez. M. Zavala. Lic. Enrique Larida, secretario.

Es copia que certifico. México, 8 de Abril de 1874. Lic. Emilio Ordaz, oficial mayor.

## AMPARO.

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco, por el C. Francisco Labastida, contra la orden dictada por el Juez primero de lo criminal de Guadalajara, por la que fué reducido á prision.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez: El Promotor fiscal dice: Don Francisco Labastida pidió amparo contra una orden inmotivada de prision que hacía su persona, expidió el Juez 1º de lo criminal de esta ciudad, por ser contrario á la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitución, agregando además razones fundadas en el fuero militar de que debe gozar como coronel del ejército, según la ley de 15 de Setiembre de 1857, y en la erigencia particular que tiene de que la autoridad judicial del Estado no es legítima por no estar nombrada popularmente. Solicitó también la suspensión del acto reclamado.

El suscrito opuso por la suspensión de la